

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez-Parga. 1982-1991
Editor: Fredy Rivera Vélez
Asistente General: Margarita Guachamín

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: US\$. 9

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 12

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$. 3

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Tel: 2522763 • Fax: (593-2) 2568452

E-mail: caap1@caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Magenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazul Offset



ISSN-1012-1498

ECUADOR DEBATE

64

Quito-Ecuador, Abril del 2005

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

En los arrabales del Estado de naturaleza / 7-20

Fernando Bustamante

De nuevo el nuevo (des)orden mundial / 21-42

José María Tortosa

Conflictividad socio-política Noviembre 2004-Febrero 2005 / 43-48

TEMA CENTRAL

Del conflicto social al ciclo político de la protesta / 49-72

José Sánchez-Parga

El peso de la noche: una perspectiva histórica
de la crisis política en Ecuador / 73-90

Pablo Ospina Peralta

Octubre Negro BOLIVIANO / 91-104

Marcelo Varnoux Garay

La consolidación hegemónica de la democracia
radical en Venezuela (2002-2004) / 105-134

Romero J, Juan E; Carlos Pinto y Edivio Ferrer

DEBATE AGRARIO

La rápida expansión de los supermercados en Ecuador
y sus efectos en las cadenas agroalimentarias / 135-150

Miguel Zamora

ANÁLISIS

Afrolatinidad, construcciones teóricas y sociales hacia abrir las
Ciencias Sociales en América Latina / 151-156

Madeleine A. L. Alingué

Las mentalidades sociales y el nivel del preconsciente
colectivo en el tercer mundo / 157-166

H.C.F. Mansilla

RESEÑAS

Los rostros de la deuda. Cd. Jubileo 2000, ILDIS, UNICEF / 167-174

Teodoro Bustamante

Derecho ambiental y sociología ambiental Iván Narváez / 175-178

Guillaume Fontaine

Octubre Negro BOLIVIANO

Marcelo Varnoux Garay

Los acontecimientos de Octubre del 2003 en Bolivia, con un lamentable saldo de muertos y heridos, significó el fin del sistema de "democracia pactada", que sustentará a la democracia boliviana por más de dos décadas, así como el descrédito de los partidos políticos. La sucesión presidencial y la distancia del gobierno de los intereses partidarios plantea un nuevo escenario para recomponer el sistema político y resolver los problemas de exclusión étnicas, regionales que acompañan a la historia boliviana desde el inicio de la república. El surgimiento de un "sentido común" contra la violencia impidió mayor tragedia.

El Contexto

Para comprender en su verdadera dimensión los acontecimientos acaecidos el mes de Octubre de 2003 y que culminaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República, es preciso en primer lugar abandonar la mitología que se ha tejido, desde entonces, alrededor de unos movimientos sociales elevados a la categoría de sujetos políticos conscientes de su papel en el proceso ya mencionado.

Lo de Octubre representa, además de la fisura sin posibilidad de solución que ha sufrido todo el sistema político, la culminación de un proceso de conflictos sociales, crecientemente violen-

tos e incontrolables, suscitados desde el año 2000. Es decir, y más allá de las especulaciones teóricas de los promotores intelectuales de la violencia social, los hechos que se desarrollaron, especialmente, entre el 10 y el 17 de ese mes, encajan perfectamente en la dinámica que adquiere un conflicto social desde el punto de vista de la teoría. En este sentido, probablemente lo excepcional aquí sean los detalles y la forma en que finalmente toda una sociedad resolvió una situación extremadamente delicada.

Entre Febrero y Octubre del año 2003, el sistema político boliviano vive una especie de paréntesis que no es debidamente aprovechado por los partidos en función de gobierno para en-

* Cientista político. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Paz (La Paz, Bolivia), Presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política.

mendar un conjunto de conductas y prácticas que tenían como objetivo fundamental, la promoción de intereses particulares y de grupo, distintos y alejados del interés colectivo. El cuoteo del poder y la prebenda habían erosionado peligrosamente no solo la legitimidad de los partidos, sino la institucionalidad democrática.

Gonzalo Sánchez de Lozada eligió la peor opción: continuar apoyándose en una coalición parlamentaria sustentada en la lógica del "toma y daca", y en las Fuerzas Armadas para evitar, hasta donde sea posible, la insurgencia de protestas capaces de cristalizar en movimientos sociales. Naturalmente, la estrategia mencionada estaba destinada al fracaso porque no existía la voluntad de afectar una forma de gobernar que una buena parte de la ciudadanía percibía como ajena a sus intereses y necesidades más urgentes. En términos sencillos, junto a las formas groseras e indignantes que adquirían las disputas por cargos en la administración pública, el ciudadano no sentía realmente la democracia en sus bolsillos.

Ahora bien, en la vereda de los partidos de oposición las cosas no estaban mejores, ya que ninguno de ellos (MAS, NFR ó MIP) expresaba la esperanza del cambio. Rehenes de unos liderazgos de cuarta categoría, con visiones de país que, por ridículas o ingenuas, repetían lugares comunes y, en el fondo, no planteaban nada nuevo; nada que pudiera ofrecer al país una salida sensata a la crisis económica y política.

En Agosto el gobierno consigue incorporar a la coalición a la NFR, con el evidente propósito de fortalecer su presencia parlamentaria y resolver varios temas pendientes; desde el déficit fiscal hasta la elección de un puerto para exportar el gas a Norteamérica. La aparente gobernabilidad parlamentaria no tiene, en este caso, un correlato en el nivel social. Efectivamente, ¿de qué sirve una mayoría parlamentaria si no se consigue detener la velocidad de un proceso que está minando la legitimidad y la autoridad del Estado? Los socios de la coalición oficialista, cada uno a su modo, se autoengañan de forma dramática.

El MNR cree que ha sumado políticamente, y esto, le reportará beneficios a mediano plazo, cuando comienzan a cristalizar las "obras con empleos". El NFR tiene la certeza que ha realizado un "buen negocio" y, de paso, mira con optimismo el futuro político de su líder; el MIR está convencido de haber engañado a movimientistas y enfeñeristas, porque ha cedido poco y todavía tiene el control de áreas estratégicas del aparato estatal: en suma se siente indispensable. Y si las cosas van mal, piensan todos, ahí están los militares para "sostener" la democracia.

En estas circunstancias, el tema del gas se convierte en el caballo de batalla de la alicaída oposición política y de varios dirigentes sindicales que buscaban en primer lugar protagonismo para

escalar dentro de sus respectivas organizaciones, o consolidar su liderazgo¹.

Y es que la ciudadanía presume que la venta del gas se ha definido a sus espaldas, contra sus intereses; en consecuencia, se multiplican las voces exigiendo la anulación del supuesto negocio. Además, se recuerda con insistencia lo que aconteció en el pasado, cuando valiosos recursos naturales fueron prácticamente regalados y no contribuyeron a elevar el nivel de vida de los bolivianos.

La sensación de engaño y la constatación de varios sectores sociales que hay una brecha intolerable entre sus expectativas y las condiciones en las que realmente viven o sobreviven, generan una masa crítica dispuesta a la protesta.

Precisamente, varios sectores sociales que residen en la ciudad de El Alto, vecina de la ciudad de La Paz, encarnan el perfil ya descrito; por otra parte, los mecanismos represivos que utilizó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desde Septiembre, alentaron la formación de un gran movimiento social, organizado a partir de las juntas vecinales y con una rígida disciplina in-

terna que explica, en gran medida, el éxito alcanzado.

El Escenario, los Actores y las Estrategias

El escenario del conflicto fue configurándose desde Septiembre con el inicio de una "huelga de hambre" auspiciada por dirigentes de la CSUTCB, leales a Felipe Quispe. La principal demanda: la liberación inmediata de un dirigente campesino acusado de asesinato, junto al cumplimiento inmediato de las decenas de puntos convenidos en gestiones anteriores y que, supuestamente, beneficiarían al ámbito rural del país.

Lo que en realidad buscaba Quispe era recuperar legitimidad entre sus bases. Una convocatoria previa a bloqueo de caminos había fracasado rotundamente, incluso en Achacachi donde el dirigente era fuerte. Encerrados en el auditorio de Radio San Gabriel, los campesinos inician una huelga política con objetivos bastante discutibles.

Sin embargo, la huelga coincide con un paro cívico en la ciudad de El Alto contra la implementación de un

1 Es ilustrativo el caso del dirigente Jaime Solares, elegido en un Congreso de la Central Obrera Boliviana plagado de tensiones, como Secretario Ejecutivo (máximo cargo de dicha organización). Se multiplicaron las denuncias respecto a que el citado dirigente había sido paramilitar en el gobierno de facto de Luis García Meza; varias entidades sectoriales no estaban de acuerdo con su elección y bloquearon el aval legal, por parte del Ministerio de Trabajo, de la directiva Cobista. Solares, por su parte, consiguió resistir los movimientos generados en contra suya y solicitó, en reiteradas oportunidades, reunirse con las autoridades de Trabajo para resolver el asunto del reconocimiento oficial de su directiva. Finalmente, optó por sumarse de forma radical a la demanda supuestamente general, de evitar la exportación del gas por un puerto chileno, sumando la exigencia de abrogar el D.S. 24806 que otorgaba la propiedad de los hidrocarburos, en boca de pozo, a las empresas petroleras transnacionales.

par de formularios municipales que, según dirigentes vecinales, tenían como propósito incrementar los impuestos de inmuebles. El éxito de la medida alienta a organizar otro paro; esta vez, en contra de la venta del gas por un puerto chileno.

Paralelamente, los campesinos de Achacachi deciden bloquear el camino hacia Sorata, dejando incomunicados a centenares de turistas que habían concurrido a la fiesta del pueblo. Esto ya planteaba un problema al gobierno que decidió negociar directamente con Felipe Quispe, en la certeza que un acuerdo terminaría con el conflicto. Además, el tiempo corría en contra suya, pues, el viernes 19 de Septiembre estaba anunciado el paro en El Alto que, según Evo Morales, inauguraba la *guerra del gas*.

El día señalado la ciudad de El Alto paralizó casi totalmente sus actividades y se organizó una marcha que llegó a la ciudad de La Paz, bajo consignas como las siguientes: *"El gas nos pertenece por derecho, recuperarlo e industrializarlo es un deber"*; *"No a la venta del gas, industrializar hasta vencer"*; *"Tambores de guerra en defensa de nuestro gas"*, etc. Probablemente, el slogan más interesante es el primero; su potencialidad radica en evocar, en una sola frase, distintos imaginarios. La sustitución de la palabra "mar" por "gas" permite activar un profundo sentimiento boliviano relacionado con nuestra mediterraneidad a causa de la injusta guerra con Chile y, además, coloca

nuevamente en el tapete el complejo problema de nuestra relación con ese país que, desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad, tiene una deuda histórica con Bolivia². No hay que olvidar que, desde la escuela, se imparte la idea que los chilenos nos arrebataron una salida soberana al Océano Pacífico, condenándonos al subdesarrollo. Ahora bien, para mucha gente, no era posible que se eligiese un puerto chileno para exportar el gas, beneficiando al usurpador. En este sentido, un conjunto de elementos simbólicos que unen a los bolivianos estaban cobrando nuevamente carta de ciudadanía, más allá de su carácter simplista y, en ocasiones, definitivamente chauvinista.

Por su parte, el gobierno había llegado al convencimiento que detrás de estas movilizaciones se escondían grupos y partidos que pretendían derrocar al Presidente y, en consecuencia, dispuso la utilización del ejército y la policía, en primer lugar para disuadir pero también con el objeto de amedrentar.

El 20 de Septiembre se interrumpen, casi sin posibilidad de solución, las escasas líneas de comunicación con los dirigentes campesinos leales a Felipe Quispe y con varios sectores sociales en conflicto. Ese día, se dispone un operativo militar – policial, para rescatar a más de seiscientos turistas de la localidad de Sorata, atrapados casi una semana por el bloqueo campesino en Warisata.

2 Cfr. Suárez, Hugo José: *Una Semana Fundamental: 10 – 18 Octubre 2003*; Muela del Diablo Editores; La Paz, 2003; (p. 33).

Se menciona que existieron presiones de las representaciones diplomáticas de EEUU, Alemania, Inglaterra, etc., para proceder al rescate de ciudadanos de esos países atrapados en Sorata. El convoy militar arriba al citado pueblo sin mayores inconvenientes, pero en el retorno se produce una emboscada campesina que desemboca en un enfrentamiento armado. Las fuerzas combinadas se abren paso hasta Warisata y desde allí a la ciudad de La Paz, dejando tres muertos en el bando campesino.

Desde una perspectiva objetiva, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no le quedaba otra alternativa de proceder de esa forma, a raíz de la radicalización de un bloqueo en el que la violencia campesina fue por demás evidente. Asimismo, es un hecho incuestionable que Felipe Quispe ya no mandaba en la provincia Omasuyos (no se movió durante todo el conflicto del Auditorio de Radio San Gabriel) y, por lo tanto, eran remotas las posibilidades de que llegando a un acuerdo con el citado dirigente, se levantara el bloqueo en

Warisata. Los testimonios de los turistas rescatados fueron utilizados para mostrar la brutalidad de los métodos sindicalistas y, para un sector de la opinión pública, quedó clara la estrecha relación entre los campesinos de esa parte del Departamento de La Paz con grupos subversivos de origen internacional³.

Algo que se reclamó y con justificada razón, fue la ausencia de representantes de Derechos Humanos, tan activos cuando se ejerce la violencia estatal en contra de la sociedad civil, pero sugestivamente pasivos en situaciones que involucran a sectores organizados de la sociedad (sindicatos campesinos en este caso) contra ciudadanos comunes.

Probablemente, un rol más activo de Derechos Humanos hubiera evitado el desastre de Warisata. Unos días después del incidente, se supo de la existencia de otro grupo de ciudadanos atrapados en la localidad de Liquisani por un bloqueo campesino y que exigían a las autoridades del gobierno una intervención militar para llegar a sus

3 Los campesinos utilizaron armas de largo alcance y dispararon con precisión contra los militares, hiriendo a varios. La pregunta que el gobierno se encargó de instalar entre la opinión pública fue: ¿de dónde salieron esas armas y cómo era posible que simples campesinos actúen utilizando tácticas de guerra? La respuesta objetiva indicaba que dichas armas fueron sistemáticamente sustraídas de los cuarteles militares instalados en el Altiplano Central y que los francotiradores fueron conscriptos, entrenados precisamente en tácticas de guerra. En este sentido, la presencia de grupos subversivos ligados a Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) operando en Bolivia era una probabilidad remota. Lo real era la ausencia de las instituciones estatales del orden en la región de Omasuyos. En efecto, desde los conflictos del año 2000, la policía, los jueces, subprefectos, etc., fueron expulsados de las comunidades rurales y se instaló un tipo de justicia y administración comunitaria que, en los hechos, ha resultado más abusiva, corrupta y violenta. Es este tipo de "usos y costumbres" los que reivindican con gran entusiasmo Álvaro García Linera, Raúl Prada y otros que se han convertido en los promotores de la violencia social desde la guerra del agua en Cochabamba.

hogares en la ciudad de La Paz y el interior del país. Esta vez actuaron los activistas de la Asamblea de Derechos Humanos y con muchísimas dificultades, en coordinación con efectivos militares y policiales, lograron rescatar a la gente, sin muertos y heridos.

La situación se tornaba muy complicada para el gobierno que, a partir de ese momento, adoptó una estrategia defensiva. En cambio, los partidos políticos de la oposición, básicamente el MAS y el MIP, asumían una estrategia ofensiva para impedir la venta de gas a Norteamérica, revisar sustancialmente la Ley de Hidrocarburos y abrogar el D.S. 24806 que otorgaba a las transnacionales petroleras, la propiedad en boca de pozo de los hidrocarburos.

En todo caso, el movimiento social que comenzaba a gestarse no tenía un liderazgo definido. Ni Evo Morales y menos Felipe Quispe podrían atribuirse su dirección. Lo que en realidad había ocurrido era la emergencia de varios dirigentes sectoriales radicalizados como Jaime Solares, Roberto de la Cruz, algunos más de la Central Obrera Regional de El Alto, dirigentes vecinales y gremiales de la misma ciudad; todos ellos convergían precisamente en la idea de la NO VENTA DEL GAS por Chile. Pero al mismo tiempo, en algún momento a lo largo de este proceso de incubación del movimiento, debieron darse cuenta que disponían de verdaderas posibilidades para el éxito. Operaban a su favor dos cosas: un conjunto de recuer-

dos, tradiciones e imaginarios colectivos como los que están referidos a la mediterraneidad boliviana que al ser reinterpretadas en términos estratégicos, permiten dotar al grupo de argumentos legitimadores para la rebelión o establecen eficaces vínculos programáticos, aún cuando los mismos expresen la precariedad de la coyuntura⁴.

Ahora bien, se menciona que la gran mayoría de los movimientos ocurridos en la historia no han generado organizaciones nuevas, sino que se gestan aprovechando instituciones o formas de sociabilidad preexistentes, ajenas en principio, a los motivos de la revuelta⁵. Precisamente este rol fue asumido por las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, facilitando la movilización y constituyendo un factor clave para el éxito final. En este sentido, los dirigentes radicales que consiguieron instalarse en medio del movimiento social, fueron meros articuladores de una dinámica que cobró una notable autonomía de posiciones ideológicas y filiaciones partidistas.

Días Aciagos, Días de Violencia

Todo empezó el 8 de Octubre con el anunciado paro cívico en la ciudad de El Alto. Las demandas son muy variadas pero sustancialmente giran en torno a la defensa del gas y el rechazo al ALCA. El gobierno minimiza la protesta aún cuando es perceptible el acatamiento del paro, en gran parte forza-

4 Cfr. Cadarso, Pedro Luis Lorenzo: *Fundamentos Teóricos del Conflicto Social*; Siglo XXI de España Editores, S.A.; España 2001; (p. 104 – 109).

5 Ibid.; (p. 116)

do por las juntas vecinales y organizaciones gremiales que implementan la medida incluso en contra de la voluntad de la mayoría de sus afiliados.

En términos objetivos, el paro estaba destinado al fracaso si en un plazo no mayor a 48 horas el gobierno respondía de una u otra manera las demandas de El Alto. Pero luego del mediodía, se producen los primeros enfrentamientos en Senkata, camino a Oruro, entre fuerzas combinadas del ejército y la policía con mineros que llegaban a la ciudad de forma agresiva, apedreando a los vehículos que por allí transitaban. Hay muertos y heridos entre los mineros. Además, la red radiofónica ERBOL transmite en vivo y directo los sucesos activando un sentimiento de indignación en la población. La teoría del conflicto señala que una respuesta desproporcionada por parte de las autoridades, es frecuentemente interpretada por el grupo rebelde como una provocación ilegítima, propiciando el escalamiento de la violencia⁶. Precisamente esto ocurre, facilitando la cohesión del insurgente movimiento social y una aguda polarización socio – política. Por su parte, la coalición de gobierno lanza una de las peores señales a la población, eligiendo en el Parlamento a un desconocido como Defensor del Pueblo, a contrapelo del apoyo ciudadano que había recibido la ex – defensora Ana María Romero de Campero.

Entre el Viernes y el Sábado los caminos hacia la ciudad de La Paz se van cerrando. Lo más grave, la existencia

de gasolina, diesel y gas licuado se agota, pues, no es posible el abastecimiento desde la planta de Senkata ubicada, precisamente en la ciudad de El Alto.

Funcionarios de rango intermedio del gobierno todavía intentan algún acercamiento con los dirigentes gremiales y vecinales de El Alto, pero toda negociación se frustra rápidamente ya que existe intransigencia de ambas partes. El conflicto social entra en un proceso de radicalización táctica, que arrastra las demandas de los grupos rebeldes hacia el maximalismo⁷. Se habla ya de la renuncia del Presidente si no se abroga inmediatamente el D.S. 24806 y se convoca a referéndum vinculante para consultar al pueblo el destino del negocio del gas.

Todo hacía prever que el fin de semana habría una especie de cuarto intermedio en el conflicto; finalmente, la ciudad de El Alto vive fundamentalmente del comercio y los días de paro dañan la economía de miles de ciudadanos. Sin embargo, nada de esto sucede, pues, vecinos y comerciantes se mantienen firmes en la protesta. Hay que tener en cuenta que el tipo de disciplina exigida es directamente proporcional con la radicalidad de la protesta. Juntas vecinales y sindicatos de comerciantes aplican *mano dura* a sus bases para evitar fisuras en el movimiento con lo que se establece una estrategia de movilización que puede desarrollarse por un tiempo prolongado, aumentando las opciones de éxito.

6 Cfr. Cadarso, Pedro Luis Lorenzo: *Fundamentos...*; ●b. Cit.; (p. 173 – 175).

7 Ibid.; (p. 148 – 149).

El Sábado 11 de Octubre por la noche, se suscitan algunos saqueos en la ceja de El Alto. El gobierno decide *militarizar* la ciudad para evitar desmanes y comienza a planificar la organización de un convoy de cisternas para abastecer de carburantes a la ciudad de La Paz. Se piensa que es inminente la declaración de un Estado de Sitio. Los portavoces gubernamentales se dirigen a la población denunciando un plan de *desestabilización*, planificado y financiado desde el exterior del país. Se acusa a Evo Morales de pretender la ruptura de la institucionalidad democrática y se convoca al diálogo, afirmando que ni el tema de la venta del gas ni el que corresponde al ALCA están cerrados.

En este momento está claro que el gobierno ha adoptado una estrategia esencialmente defensiva y apuesta a la utilización de la fuerza para terminar el conflicto social. Sin embargo, ha perdido legitimidad y nadie sabe si los militares acatarán las órdenes de un régimen desacreditado por sus propios errores.

Fuerzas combinadas del ejército y la policía irrumpen la mañana del Domingo 12 de Octubre en Villa Ballivián que colinda con la autopista. Allí, varios manifestantes se habían dedicado a lanzar piedras contra los escasos automóviles que circulaban. Las tropas emplean armas de fuego para dispersar a la multitud, hay varios muertos y heridos. La red radiofónica ERBOL nuevamente transmite, en vivo y directo, los sucesos provocando la indignación popular.

La planta de almacenamiento de combustibles de Senkata es rodeada por vecinos que pretenden tomarla por asalto, al percatarse que se pretende sa-

car un convoy de cisternas hacia la ciudad de La Paz. Se producen enfrentamientos en los que mueren al menos veinte personas y otras cuarenta o cincuenta son heridas. El convoy se abre paso a sangre y fuego hasta la ciudad de La Paz.

Carlos Sánchez Berzaín, triunfante, aparece en la televisión anunciando el fin del desabastecimiento de gasolina. Unos miles de litros junto a unas cuantas centenas de garrafas no servirán para cubrir la demanda de la ciudad. Pero el costo en vidas humanas es definitivamente injustificable.

Al caer la tarde, batallones que aparentemente llegaron por el camino del lago Titicaca procedieron a disparar indiscriminadamente a los manifestantes en Villa Ingenio. La gente está aterrizada; sin embargo, el paro no cede.

Se calcula que alrededor de 30 a 35 personas fallecieron en la jornada más sangrienta de todo el período democrático inaugurado en 1982.

El Lunes 13 de Octubre la ciudad de La Paz pretende normalizar sus actividades en la mañana, pero el paro ha llegado también a esta ciudad. Una gran marcha baja de El Alto exigiendo la renuncia del Presidente. A media mañana, el Vicepresidente Carlos Mesa anuncia su alejamiento del gobierno, pero no del cargo, a raíz de la forma violenta en que el gabinete de Sánchez de Lozada está manejando el conflicto. En la residencial zona sur de la ciudad de La Paz, se producen enfrentamientos entre vecinos y militares; mueren varias personas.

Si no puedes contra ellos, únete a ellos dice el refrán. Y ésta es la táctica

que adopta la población de la ciudad de La Paz. Se suma al conflicto cercano al poder que todavía resiste desde la residencia presidencial en San Jorge⁸ y evitando, de este modo, un inútil enfrentamiento con su vecina de El Alto.

Al comenzar la tarde, el Presidente aparece en los medios de comunicación, afirmando enfáticamente que no renunciaría y denunciando una conspiración financiada por potencias extranjeras para fracturar el proceso democrático boliviano. Acusa directamente a Evo Morales y Felipe Quispe de ser los cabecillas de la sedición, junto a dirigentes sindicales autoritarios. Casi inmediatamente, Goni recibe el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y se promueve una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para apoyar al régimen democrático de Sánchez de Lozada.

En realidad, lo que consigue el gobierno es alargar la inminente caída, pues, las cartas están echadas sobre la mesa. La consigna de *Fuera Goni* ha unificado al movimiento social y solo la renuncia del primer mandatario terminará el conflicto.

El día Martes 14 de Octubre transcurre en relativa calma. En la ciudad de El Alto especialmente, se efectúan velatorios colectivos de las víctimas del día

Domingo. Solo algunas radios pueden transmitir el ambiente de luto que se vive. Los medios televisivos no pueden llegar a esos lugares. Se suman las voces que exigen la renuncia del Presidente, pero el poder político está blindado.

El Miércoles 15 de Octubre se reactivan las marchas y después del mediodía se organiza la primera huelga de hambre, auspiciada por la ex – defensora del pueblo Ana María Romero, que consigue el apoyo de intelectuales y sectores de clase media. Por la noche el ejemplo cunde, y en varias parroquias de la ciudad se multiplican los piquetes de huelga. La demanda es única: la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y la sucesión Constitucional. El gobierno reacciona ofreciendo un referéndum consultivo sobre el destino del negocio del gas, la revisión de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la Asamblea Constituyente al texto de la Constitución para su cristalización efectiva. Nadie se toma en serio la oferta gubernamental por su carácter extemporáneo.

Al día siguiente, se organiza una de las concentraciones más grandes que se tenga memoria en Plaza San Francisco de trabajadores y vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto. Se reitera la conocida exigencia: Goni debe

8 La ciudad de La Paz adoptó una actitud inteligente en esta coyuntura; unió fuerzas con El Alto para acelerar la resolución del conflicto. La gente de los barrios, de norte a sur y este a oeste, se movilizó exigiendo la renuncia de Goni. Hubieron muestras de verdadera solidaridad y, a pesar de los aciagos momentos, la ciudad cercada se convirtió en sitiadora del poder político que cobija. Observando estos hechos, uno entiende las razones por las que La Paz ha sobrevivido a cercos indígenas, sublevaciones populares, revoluciones, golpes de Estado, etc., a lo largo de su historia de casi cinco siglos.

renunciar. Algunas escaramuzas con la policía, no impiden que cientos de marchas tomen rumbos distintos. A estas alturas, está claro que el conflicto ha generado una dinámica propia, que nadie, ni los rebeldes ni quienes se oponen a ellos, controla por completo.

El Vicepresidente Carlos Mesa reitera su decisión de alejarse del gobierno. Sin embargo, el poder no cede. El ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín declara por radio Fides que aunque la gente marche un mes entero, el Presidente no renunciará.

A cien kilómetros de la ciudad de La Paz, en Patacamaya, una columna de seiscientos mineros cooperativistas es detenida por el ejército. Mueren tres mineros en la refriega y los soldados proceden a saquear las pertenencias de los trabajadores. El hecho es comunicado a centros mineros cercanos a Oruro y miles deciden marchar hacia la mencionada localidad y de allí a La Paz.

El gobierno está vacilante; se presentan fisuras en el gabinete presidencial y es que no hay consenso acerca de utilizar toda la fuerza armada disponible para detener el conflicto. Un sector de la cúpula gubernamental teme una nueva masacre; de características inéditas en democracia.

El Viernes 17 de Octubre es definitivo. Se sabe que los militares han optado por dar un paso al costado; prueba de ello es que han dejado pasar a casi cinco mil mineros en Patacamaya sin recurrir a la violencia. A media mañana, Manfred Reyes Villa, jefe de la NFR, anuncia el retiro de su partido de la coalición de gobierno. La renuncia de Goni es inminente. En la residencia presidencial reina un ambiente de confu-

sión y se notan los preparativos para la huida.

En las calles de la ciudad de La Paz ocurren escenas surrealistas. Junto a marchas de vecinos exigiendo la renuncia del Presidente, hacen su paso procesiones de gente cargando imágenes de la virgen María, pidiendo paz.

A estas alturas es evidente que el gobierno de Goni se desmorona. Los medios de comunicación informan de la convocatoria al Parlamento para seguramente recibir la carta de renuncia del Presidente. Al mismo tiempo, varios vehículos oficiales salen de la residencia de San Jorge hacia el Colegio Militar de Ejército donde esperan helicópteros que trasladan a los jefes y sus familias al aeropuerto internacional de El Alto.

Para el grueso de la población, Gonzalo Sánchez de Lozada huye como un delincuente. Ya al caer la tarde, Diputados y Senadores van llegando al Parlamento, escoltados por la fuerza pública, mientras el Presidente vuela hacia Santa Cruz y de allí, se rumorea, hacia Miami.

Tanto en El Alto como en La Paz, la gente percibe que el conflicto está a punto de culminar y esto genera un gran alivio. Casi a las ocho de la noche, se lee en el Congreso la carta del Presidente en la que deja establecido que pone a disposición su cargo, señalando sin embargo, el grave peligro que su aceptación acarrearía para la institucionalidad democrática. La renuncia es aceptada por mayoría absoluta y se procede a la sucesión constitucional.

El Vicepresidente Carlos Mesa jura como a la primera magistratura y en un

gran discurso, promete incorporar a la agenda de su gobierno tres cosas fundamentales: Asamblea Constituyente, la realización de un referéndum vinculante para que los bolivianos determinen el destino que tendrá el gas natural y, finalmente, la revisión de la Ley de Hidrocarburos.

De esta forma, se ha cerrado uno de los capítulos más estremecedores de la historia política del país, por la forma que se desarrolló y afectó a la ciudadanía y al sistema social en su conjunto.

Balance Final

Alrededor de 55 muertos y cerca de 400 heridos es el saldo de la violencia desatada en torno a la denominada "guerra del gas". Un costo demasiado alto para los resultados finales que nos colocan casi como al principio. Es decir, sin muchas opciones para superar la crisis económica que no pasen, necesariamente, por la exportación del gas a mercados internacionales.

Ahora bien, el conflicto social y las actitudes de rebeldía en general tienen, si son tratadas con sentido común desde el poder, a fortalecer el sistema y a quienes lo dirigen. He aquí el gran drama de todo rebelde: puede estar potenciando a quien combate al indicarle las reformas que es necesario cristalizar. Además el conflicto es útil socialmente, no solo como instrumento de reforma o transformación, sino también como herramienta para apuntalar el sistema vigente: un antídoto contra la re-

volución, siempre y cuando, claro está, el poder establecido sea capaz de alterar la capacidad de diálogo con el rigor de la amenaza de utilizar la fuerza si llegase el caso⁹.

Precisamente la forma en que concluyeron los acontecimientos en Octubre demuestra las anteriores aseveraciones. En primer lugar, una gran mayoría de los bolivianos apoyó la salida constitucional que, en los hechos, significa la preservación de la institucionalidad democrática pese a todo. En segundo lugar, el nuevo gobierno tomó las principales demandas planteadas durante el conflicto para incorporarlas a su agenda y, de esta forma, transitar el camino hacia la urgente reforma del sistema político, pero también hacia la consolidación de un estado de cosas en el que la redistribución de la riqueza sea más equitativa.

Es poco probable que utilice la violencia estatal de la forma que el gobierno precedente lo hizo, hecho que le resta autoridad pero no legitimidad. En efecto, si es que existe hoy día un parámetro político en el que la mayoría de los bolivianos se reconocen ese es el Presidente Carlos Mesa, cuya popularidad es, de lejos, superior a la de todos los líderes políticos y sociales juntos.

En este sentido, se equivocan quienes creen que lo ocurrido en Octubre fue un arranque revolucionario del pueblo que ha quedado inconcluso, pues, falta la toma definitiva del poder. Los eventos conflictivos que se han revisado, con sus características peculiarida-

9 Cfr. Cadarso, Pedro Luis Lorenzo: *Fundamentos...*; Ob. Cit; (p. 221 - 222).

des, pueden ser analizados con las herramientas que proporciona la teoría del conflicto social, cuya conclusión más importante quizás sea la siguiente: el conflicto social, lejos de servir como un instrumento para el debilitamiento de una organización social, la reconduce por el sendero del reformismo o, incluso, reafirma sus aspectos más tradicionales¹⁰.

No cabe duda sin embargo, que la forma de hacer política en Bolivia ha entrado a una fase terminal. La llamada *democracia pactada* que se convirtió en un mero eufemismo para justificar el grosero reparto del poder, no va más. Carlos Mesa intenta gobernar sin los partidos (aún cuando depende de ellos en el ámbito parlamentario para implementar las iniciativas que, teóricamente, aliviarán la crisis económica y social); esto es una señal poderosa hacia la población que ha conseguido establecer una diferencia entre lo que significa la democracia y los que expresan los políticos.

Y es que en las horas más angustiosas del conflicto, cuando parecía que se había llegado a un punto en el que todo estallaría sin remedio, desde la sociedad civil se generó una especie de contracorriente a la violencia y la irracionalidad. Habían sido colocadas en un inadmisiblemente estado de vulnerabilidad la vida, los derechos humanos y la democracia.

Nada podía justificar la muerte de compatriotas, menos la defensa de un esquema de gobierno y un sistema po-

lítico que habían demostrado su incapacidad para resolver los grandes problemas del país. Al respecto, es fundamental convenir que los acontecimientos de Febrero fueron una señal de alarma; se abría un paréntesis donde era preciso dar señales de cambio a la colectividad. Esto no ocurrió, ya que la arrogancia de los partidos y la grosera ambición de poder que caracterizó a sus jefaturas, entendió dichos eventos como un "mero accidente" en la historia política del país.

Era previsible que tal subestimación provocara el desenlace terrible que se describe más arriba. Sin embargo, y a pesar de todo el dolor y sufrimiento que un pueblo entero experimentó en los días más aciagos, se impuso el sentido común.

Al respecto hay que destacar que hemos avanzado como sociedad, pues, desde los cuatro puntos cardinales del país miles de voces exigían el respeto a la vida, a los derechos humanos y la preservación del orden democrático. Más allá de las exigencias sectoriales y regionales, se constató amargamente que la violencia no resuelve nada.

Y se avanzó en este sentido. La sucesión constitucional y la organización de un gobierno alejado de los intereses partidarios plantea un nuevo escenario donde, si se mantiene el sentido común que por ahora nos salvó de caer en el abismo, pueden construirse las condiciones para una nueva forma de hacer política, para resolver, uno a uno, los problemas que nos atingen y restituir al-

10 *Ibid.*; (p. 224).

gunos de los valores democráticos más importantes como la tolerancia y el diálogo.

Pero además, existe una valiosa oportunidad de examinar con objetividad nuestros problemas estructurales; ésos que hemos arrastrado desde que constituimos la república: la exclusión por factores étnicos, el regionalismo, el centralismo, etc. La intensidad del conflicto permitió que todo aquello que por años ignoramos o simplemente no quisimos ver, reflatara con fuerza. Y el desafío no es solo para el gobierno, sino fundamentalmente para toda la sociedad boliviana que, ahora sí, tiene la posibilidad de mirarse sin prejuicios, pero también sin rencores.

Algunos dicen que el gobierno de Carlos Mesa es frágil porque no descansa en una estructura partidaria y debe responder a demasiadas demandas al

mismo tiempo. Sin embargo, de alguna forma expresa la posibilidad de un cambio democrático, capaz de fundar las bases para un sistema económico más equitativo y un sistema político organizado para atender los intereses colectivos.

Liberados de la ominosa carga de unos intereses mezquinos que se instalaron en los partidos, tenemos la obligación de recomponer el sistema político entendiendo que no es posible en este momento plantear exclusiones de ninguna naturaleza o condiciones que alienen el enfrentamiento entre bolivianos.

Ciertamente se ha preservado la débil institucionalidad democrática que tiene que ser reforzada con actitudes democráticas que promuevan la discusión abierta de los problemas y la resolución pacífica de nuestras controversias.

AMÉRICA LATINA HOY



Vol. 36, abril de 2004

NUEVAS FORMAS DE PROTESTA POLÍTICA

Constanza Moreira: Resistencia política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los '90

Daniel Levine y Catalina Romero: Movimientos urbanos y desempoderamiento en Perú y Venezuela

Salvador Martí i Puig: Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿Alguna novedad?

Roberto Korzeniewicz y William Smith: Redes regionales y movimientos sociales transnacionales: patrones de colaboración y conflicto en las Américas

Donna Lee Van Cott: Los movimientos indígenas y sus logros. La representación y el reconocimiento jurídico en los Andes

Javier Auyero: ¿Por qué grita esta gente? Los medios y los significados de la protesta popular en la Argentina de hoy

VARIA

Scott Mainwaring y Anibal Pérez-Liñán: Nivel de desarrollo y democracia: el excepcionalismo latinoamericano (1945-1996)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Desee subscribirse a *América Latina Hoy* de la que recibirá ejemplar(es) anual(es) a partir de número:

Nombre / Universidad / Organismo:
DNI/CIF: Pas: Telef:
Dirección: Localidad: C.P.:
País: Correo electrónico:

Ejemplar suelto 15 euros

Subscripción anual (tres números/año) 34 euros

Marque con una X la forma de pago elegida para suscripción:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cuenta de ibérica | <input type="checkbox"/> Adjunto cheque a nombre de "Marcial Pons, Librero" |
| <input type="checkbox"/> Pago contraembolso (solo para España) | <input type="checkbox"/> Giro Postal |
| <input type="checkbox"/> Pago al recibo de la factura | <input type="checkbox"/> Con cargo a mi tarjeta de crédito (c/c)..... |
| <input type="checkbox"/> Pro forma | Número: Fecha de caducidad: |

Autorizo a "Marcial Pons, librero" para que estampara de esta compra voya con cargo a mi tarjeta de crédito.
Fecha de autorización:
Firma:

Gastos de envío: Al coste total por cada ejemplar pedido se añaden como gastos de envío 1,80 euros para España y 6,60 euros para cualquier otro país. Estos precios tendrán validez hasta la publicación del próximo número de la revista.

Enviar a: Marcial Pons, Librero, Departamento de Revistas, C/ San Sotero, 6, E-28037, Madrid (España). Correo electrónico: revistas@marcialpons.es

Para ejemplares sueltos:

Marque con una X la forma de pago elegida para suscripción:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Adjunto cheque a nombre de Servicio de Publicaciones/Universidad de Salamanca | <input type="checkbox"/> Giro Postal |
|--|--------------------------------------|

Transferencia bancaria a nombre de Servicio de Publicaciones/Universidad de Salamanca a la cuenta nº 0049-0047-17-2110148112 del Banco Central Hispano, O.P. de Salamanca, C/ Zamora, 6, E-37002, Salamanca (adjúntese fotocopia del recibo de la entidad bancaria donde se efectuó el ingreso)

Enviar a: Ediciones Universidad de Salamanca, Departamento de Ventas, Apartado 325, E37000, Salamanca (España). Correo electrónico: evs@uva.es